

# La concepción de paz de la ONU en Haití y Guatemala<sup>1</sup>

Madalena Moita  
Colaboradora de FRIDE  
Programa de Paz, Seguridad y Derechos Humanos

A primera vista Guatemala y Haití parecen países que tienen poco en común, con bases étnicas profundamente distintas, nacidos de herencias coloniales diferentes – el primero española, el segundo francesa – y con historias de independencias también disímiles. Ambos tienen pasados que les llevaron a tener Estados independientes pero disfuncionales. En los dos países las Naciones Unidas han tenido un papel destacado en las últimas dos décadas, si bien con diferentes misiones y resultados. Sin embargo, es posible extraer unas enseñanzas comunes.

Ejemplo habitual del ya controvertido concepto de Estado frágil, Haití se enfrenta hoy con una extrema inoperancia de las instituciones estatales, incapaces de dar respuesta a los problemas centrales de una inmensa mayoría de la población. Este fenómeno tiene también su origen en la ausencia de un verdadero debate transversal a toda la sociedad, desde el inicio de la transición democrática, que hubiera permitido definir un proyecto nacional en el que los haitianos se pudieran reconocer. Gobierno y oposición padecen de una ausencia de visión estratégica que permita concretar las necesarias reformas en políticas públicas en temas tan básicos como la salud, la educación o la justicia.

La falta de cuadros profesionales y de recursos materiales para construir un edificio institucional público, así como la inercia de la diminuta élite política, han propiciado que el suministro de servicios básicos se encuentre hoy a cargo de entidades internacionales, concretamente de organizaciones de acción humanitaria y del Sistema de las Naciones Unidas en Haití administrado por la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Ésta asume hoy, además de la gran prioridad del mantenimiento de la seguridad y de la formación de la Policía Nacional Haitiana, un papel impulsor de algunas reformas estructurales que siguen pendientes.

Si las características actuales de la violencia indican que es básicamente criminal, asociada a la inclusión de Haití en un entorno global complejo contaminado por el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, ésta ha sido antes manifestación de un conflicto de rasgos políticos más obvios.

Esos rasgos eran más evidentes en el momento inmediatamente anterior, durante y después del golpe de Estado de 1991, cuando una élite militar de manifiesta herencia Duvalierista derrocó por las armas a un líder que proponía una estrategia más o menos definida de cambio social y político. La propuesta populista de Jean Bertrand Aristide de una sociedad más igualitaria se había centrado en la modernización y la descentralización del Estado, con políticas claramente

---

<sup>1</sup> Este trabajo se basa en una investigación en el ámbito del Programa de Doctorado en Conflicto Político y Procesos de Pacificación de la Universidad Complutense de Madrid sobre la intervención de las Naciones Unidas en Guatemala y Haití. Además de las fuentes referidas tiene como base entrevistas efectuadas durante los viajes de investigación a Guatemala, en mayo de 2007, y a Haití, en junio de 2008

dirigidas a la mayoría más desfavorecida.<sup>2</sup> Aristide había enfrentado en sus siete meses de gobierno a los intereses de la oligarquía bajo la bandera de los valores de “Justicia, participación y transparencia”, a través del combate a la corrupción, a la invasión fiscal y a la malversación de los dineros públicos. Su intento de disolución del Estado de prebendas, dentro en un esfuerzo más amplio de inversión de las relaciones tradicionales de poder, desembocó en la revuelta militar de septiembre de 1991.

El golpe de Estado fue la primera semilla que condujo a una intervención de las Naciones Unidas en Haití, en 1993,<sup>3</sup> como tentativa de resolución del conflicto existente, cuando las dos partes enfrentadas estaban mejor identificadas que en la actualidad y cuando el carácter político de la violencia era incuestionable.

## Algunas coincidencias históricas

¿Qué papel han tenido las Naciones Unidas en las últimas décadas en Haití y qué estrategia ha seguido para tratar este conflicto? Una forma de aproximación a esta pregunta es comparar el caso haitiano con el de Guatemala, un caso espacial y temporal relativamente cercano en el que también las Naciones Unidas asumieron un papel protagónico en la resolución del conflicto, con una actuación y resultados, no obstante, muy distintos.

A primera vista Guatemala y Haití parecen tener poco en común. Con bases étnicas muy distintas, desarrolladas a partir de herencias coloniales diferentes - española y francesa, respectivamente - y con historias de independencias también disímiles, los dos países tienen en sus génesis pasados que marcaron la construcción disfuncional del Estado pese a llegar a ser entidades políticas autónomas.

El primer paso es observar sus coincidencias. De sus herencias específicas se formaron dos Estados con particularismos culturales y políticos que les confirieron una riqueza identitaria única, pero que permitieron también en momentos contemporáneos de sus historias la instauración de sistemas de poder de carácter autoritario. En ambos países se recuperaron esquemas de poder de los regímenes colonialistas que les antecedieron, instaurando un aparato estatal utilizado en función de los intereses de la oligarquía. En ambos casos ese mismo aparato sirvió de mecanismo de represión y marginalización de las esferas política y económica de una inmensa mayoría de las respectivas poblaciones.

La coincidencia relativa de fechas es significativa. En 1954 se frenó la revolución liberal guatemalteca dando inicio a un período de consecutivos gobiernos militares autocráticos. En 1957, François Duvalier llegó al poder en Haití comenzando una dictadura de carácter hereditario. Ésta terminó en 1986 cuando su hijo Jean Claude abandonó el poder forzado por una conjunción de movilizaciones internas y presiones internacionales. En ese mismo año, los militares guatemaltecos optaron por ceder el poder a los civiles también ellos impulsados por protestas domésticas y externas.

<sup>2</sup> Aristide siempre definió su propuesta de gobierno como un proyecto liberal y no revolucionario. Éste tenía, por ejemplo, entre sus prioridades la inversión en infraestructuras; una reforma agraria que incluyera asistencia técnica, subvenciones y un sistema de crédito para los campesinos; una campaña de alfabetización; la creación de Consejos inter-departamentales para la definición descentralizada de políticas públicas o la instauración de procesos judiciales a quién hubiera estado implicado en violaciones de derechos humanos desde 1986. Sobre el primer gobierno de Aristide ver, por ejemplo, Alex Dupuy (2007) *The Prophet and Power. Jean-Bertrand Aristide, the International Community and Haiti*, Rowman & Littlefield Pub., Plymouth; o Irwin Stotzky (1997) *Silencing the guns in Haiti: the promise of deliberative democracy*, The University of Chicago Press, Chicago.

<sup>3</sup> Antes las Naciones Unidas solamente habían estado en Haití con una misión de observación electoral - la ONUVEH - en 1990. A partir de 1993, las misiones de Naciones Unidas en Haití se fueron sucediendo: dos de ellas fueron misiones civiles en colaboración con la Organización de Estados Americanos -MICIVIH (febrero 1993-septiembre 1996) y MICAH (marzo 2000-febrero 2001) - y cinco fueron establecidas como misiones de *peacekeeping*: UNMIH (septiembre 1993-junio 1996), UNSMIH (julio 1996-julio 1997), UNTMIH (agosto-noviembre 1997), MIPONUH (diciembre 1997-marzo 2000), y finalmente MINUSTAH (Junio 2004 hasta hoy).

La coincidencia está marcada también por el contexto de la Guerra Fría. Ambos países fueron víctimas de la política de Estados Unidos de identificar fenómenos nacionalistas con comunismo (el gobierno de Jacobo Arbenz y su derrocamiento en Guatemala en 1954) y promocionar y apoyar a dictaduras mientras fueran aliadas de Washington (la dinastía Duvalier en Haití). Las guerrillas en Guatemala confirmaron a Washington su presunción de que ese país podría ser un nuevo Vietnam centroamericano, y el Pentágono y la CIA junto con los militares locales actuaron en consecuencia. En el caso de Haití el apoyo a una terrible dictadura fue una medida preventiva para que Haití no fuese otra Cuba.

La dimensión de la contestación interna en cada uno de los países fue distinta: Guatemala, al contrario de Haití, vivió una guerra civil. Las heridas abiertas por treinta y seis años de conflicto armado, con un contenido ideológico importante y un carácter genocida dramático, marcaron de forma terminante el panorama social y político guatemalteco del siglo XX. Haití, en cambio, nunca tuvo una guerra interna, pero el mantenimiento de las relaciones de poder heredadas del colonialismo dejó alimentar un proceso de corrupción del poder, exclusión social, y racismo por parte de la élite cada vez más profundo. En los dos casos, por otro lado, hubo una exclusión racista de la mayor parte de la población por parte de los mestizos (y pocos blancos) que constituyeron las diferentes generaciones de sus élites, pero en Haití existió el componente de la esclavitud que marcó muy fuertemente las relaciones internas entre sectores sociales.

Así, ¿no será posible identificar en Guatemala y Haití un marco conflictivo similar, hecho de represión y exclusiones, que estuvo en la génesis de la situación actual de dos de los Estados más débiles y depauperados del hemisferio occidental? La coincidencia es particularmente interesante si se considera que nuevamente en momentos históricos casi simultáneos ambos conflictos fueron sujetos de tentativas de resolución pacífica en las que un mismo organismo asumió el protagonismo: las Naciones Unidas. De hecho, no sería insensato identificar a las actuaciones en Guatemala y Haití como dos pruebas de un nuevo discurso y cuadro de prácticas de la ONU, renacida ésta tras el fin de la Guerra Fría.

## Diferentes estrategias, diferentes resultados

La cuestión que aquí se plantea es de qué forma la intervención de las Naciones Unidas influyó en las estructuras políticas que emergieron de sus respectivos procesos de apertura democrática. Esos procesos suponían en los dos países una tentativa de resolución de las causas profundas de un conflicto social y político interno.

En Guatemala, la transferencia de poder de los militares a los civiles en 1986 abrió las puertas a un proceso de negociaciones con vistas a cerrar una larga etapa de guerra civil que, sin embargo, se revistió de un carácter más amplio de proyecto de refundación nacional atento a las causas estructurales que habían hecho estallar la violencia armada décadas antes.

En Haití, la caída de la dictadura Duvalierista dio lugar a un proceso de transición democrática que llevó al poder a un primer gobierno electo que intentó, a su manera, cambiar también un sistema excluyente de relaciones sociales y políticas.

En los dos países, las Naciones Unidas intervinieron en defensa de un proyecto de apertura política, encontrando su legitimidad en un discurso y una práctica que priorizaba el respeto por los derechos humanos y por la democracia. En ese discurso, nacido del nuevo contexto internacional post-Guerra Fría, éstos se asumían como factores cruciales en la promoción de sociedades más pacíficas en un claro acercamiento a un concepto teórico distintivo de la investigación para la paz: la paz positiva.

Este concepto, propuesto por Johan Galtung en 1964,<sup>4</sup> nace de la necesidad de repensar los mecanismos de resolución de conflictos armados que se mostraban entonces poco eficaces. La propuesta, que vendría más tarde a ser absorbida por el discurso de las Naciones Unidas,<sup>5</sup> asumía que, para evitar la frecuente reincidencia de la violencia en situaciones de post-conflicto era urgente crear instrumentos capaces de atender a las causas arraigadas de la conflictividad. En este sentido, las Naciones Unidas asumieron, en los inicios de la década de los noventa, una serie de prácticas de carácter más duradero y comprometido, implicados en cuestiones de desarrollo económico y social, así como de fortalecimiento del marco democrático hacia el cual deberían transitar los conflictos, abdicando, en consecuencia, de sus formas violentas. Partiendo de esta línea, en realidad ha habido muy diferentes prácticas en uno y otro país que a su vez influyeron en los respectivos procesos nacionales.

Dentro de este marco analítico, Guatemala es un caso de relativo éxito de participación de la ONU comprometida con un proyecto de paz duradera.<sup>6</sup> En 1994, el Representante Especial del Secretario General para el país asumió, a petición de las partes, el papel de mediador del conflicto armado entre la URNG<sup>7</sup> y el gobierno. Presente en la mesa de negociaciones como observador desde 1990, el equipo de la ONU había entendido que la cuestión en Guatemala era mucho más compleja que un problema de cese del fuego. La violencia entre las partes era ya, a finales de los años ochenta, poco significativa, por lo que las Naciones Unidas optaron por integrar en la agenda de las negociaciones los temas pendientes que realmente afectaban a una convivencia sana entre los guatemaltecos.

De este modo, y plenamente de acuerdo con el nuevo espíritu propuesto por la “Agenda para la Paz”, la ONU como mediadora abrió un debate sobre temas como los derechos de los indígenas y la identidad multicultural del país, el papel de las mujeres, la cuestión de la tierra o las bases del desarrollo socioeconómico de Guatemala. De hecho, este debate se hizo no solamente entre las partes enfrentadas sino también en un foro paralelo que reunió a varios sectores sociales - la Asamblea de la Sociedad Civil. Ésta no tenía poder decisorio, pero imprimió a las negociaciones para la paz un carácter de proyecto nacional en el que sectores antes excluidos pudieron aportar su voz crítica.

Actualmente Guatemala sigue padeciendo problemas graves de desarrollo y de exclusión social y política, así como de la emergencia de nuevas formas de violencia, de carácter más criminal, que trascienden a toda la sociedad y que ensombrecen también las esferas del poder político y económico. Desafortunadamente, Guatemala se inscribe en el cuadro centroamericano afectado por fenómenos como las bandas juveniles criminales, el feminicidio o la corrupción. Algunas de estas cuestiones cuyas raíces no provienen de manera exclusiva de un escenario post-conflicto, sino también de la compleja integración en el entramado global, están igualmente presentes en Haití.

La etapa de implementación de los Acuerdos dejó varios temas inconclusos y diversas reformas pendientes, pero por lo menos el amplio cuadro de negociación impulsado por la ONU ha permitido que éstos continúen bien identificados. La riqueza del proceso de paz en Guatemala fue definitivamente la de abrir un espacio de diálogo nacional que definió una serie de prioridades que sirvieron de marco de referencia orientadora a las políticas de los gobiernos posteriores.

<sup>4</sup>Johan Galtung (1964) «An Editorial» en *Journal of Peace Research*, vol. 1, nº.1, pp. 1-4, Sage Publications, Londres.

<sup>5</sup>Véanse para el efecto los dos documentos fundamentales – Agenda para la Paz y Suplemento a una Agenda para la Paz – que sirvieron de nueva doctrina orientadora de la ONU en los años noventa en <http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html> y <http://www.un.org/Docs/SG/agsupp.html>.

<sup>6</sup>Sobre el proceso de paz de Guatemala, léase, por ejemplo, Gabriel Aguilera y Edelberto Torres-Rivas, (1998) *Desde el autoritarismo a la paz*, FLACSO, Guatemala; o Luis Pásara (2003) *Paz, ilusión y cambio en Guatemala. El proceso de paz, sus actores, logros y límites*, Fundación Soros e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala.

<sup>7</sup>Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

Ese marco no es solamente relevante por su funcionalidad, sino también porque en gran medida el conjunto de la sociedad guatemalteca lo identifica como una construcción colectiva en la que se reconoce.

En Haití, la ausencia de una apertura de la esfera política a sectores más amplios de la sociedad que permitiera una interacción entre sectores sociales y la restringida élite en el poder funcionó como un factor más del debilitamiento del marco institucional haitiano. En realidad, se perdieron algunos momentos en los que ello podría haber sido fomentado por un actor externo como las Naciones Unidas. Desde luego, lo más fácil hubiera sido aprovechar algunos períodos clave de la etapa de la transición después de la caída de Duvalier en 1986, particularmente en las elecciones de 1990 o después del episodio crítico del golpe de Estado de 1991, antes de que los respectivos actores tuviesen tiempo de solidificar posturas contradictorias.

La reacción de la ONU al golpe tardó demasiado tiempo, constreñida por la pasividad de la administración estadounidense liderada por George W. Bush, que solamente se preocupó por el tema cuando la llegada masiva de refugiados haitianos irrumpió como un problema de seguridad interna. Pero en 1993, las Naciones Unidas tuvieron una oportunidad de poner en práctica su nuevo discurso de una paz amplia, de resolución de conflictos a la luz del respeto por los derechos humanos y la democracia, cuando tuvieron que participar en el grupo de mediadores en Governor's Island. No obstante, dejaron que los temas en la agenda de los acuerdos se limitasen a cuestiones de nivel más inmediato referentes al retorno del presidente Aristide y al abandono del poder por los militares.

Efectivamente el discurso de la defensa de los derechos humanos y la democracia fueron esgrimidos más tarde como legitimación de la intervención armada de los Estados Unidos avalada por la ONU en 1994. Pero también ésta, a la par de la UNMIH<sup>8</sup> que le sucedió, se limitó al objetivo primario del retorno del Presidente, sin atender a las restantes instituciones políticas y sociales en un momento en que Haití se encontraba profundamente dividido y necesitaba un esfuerzo significativo de reconstrucción y de reconciliación.

William Zartman escribió a propósito del tema que "...nadie en Haití tenía la autoridad para llamar a un diálogo nacional, ya que todos eran parte del problema..."<sup>9</sup> resaltando la importancia que podría haber tenido una entidad internacional neutral. En la ausencia de este proceso de reconciliación y de refundación nacional, las raíces del conflicto quedaron presentes y a los diez años hicieron brotar una nueva etapa de violencia. Nuevamente, en ese momento, se perdieron algunas oportunidades de fomentar un diálogo nacional, después del golpe de Estado de 2004 o durante el gobierno provisional de Gerard Latortue, quien de hecho lo buscó en una iniciativa que sin embargo no tuvo repercusiones importantes.

Por parte de la sociedad civil emergió también una iniciativa relevante, el Grupo 184, que reunía a casi 200 miembros de asociaciones de la sociedad civil, partidos políticos y empresarios. Esto fue lo más cercano que existió en los últimos años a un diálogo nacional capaz de reflexionar sobre una estrategia para el país con una definición concreta de políticas públicas. Sin embargo, el divorcio de la sociedad civil con las instituciones políticas no permitió que los resultados de esta iniciativa llegaran a tener resonancia en la estrategia gubernamental.

En realidad, la opción de Préval en el inicio de su segundo mandato de llamar a los partidos de oposición al gobierno fue una última oportunidad perdida para alcanzar el diseño de un nuevo pacto social consensuado. Pero esa opción, al contrario, vació a la oposición de su tarea original y alimentó la pasividad gubernamental, por permitir a más partidos acceder a una serie de privilegios sin exigirles una serie de deberes.

<sup>8</sup> La UNMIH (Misión de Naciones Unidas en Haití) fue la misión de construcción de paz que se hizo cargo, en marzo de 1995, de las funciones de la Fuerza Multinacional liderada por Estados Unidos que había llegado a Haití seis meses antes.

<sup>9</sup> William Zartman (2005) *Cowardly Lions: missed opportunities to prevent deadly conflict and state collapse*, pp. 196, Lynne Rienner Publishers, Londres.

El Estado haitiano sigue siendo visto por la élite como una forma de acceder a un estatuto y a determinadas prebendas, más que como un aparato institucional al servicio de la sociedad. La inercia de las instituciones estatales es producto, y a su vez fuente, de la competencia entre distintas facciones de una élite fragmentada, sin visión política estratégica y ajena a las necesidades de la mayoría extremadamente depauperada.

La incontestable polarización del pequeño círculo de la élite ha contrastado, de hecho, con una adhesión masiva de los sectores populares a un líder, en los diferentes momentos electorales, primero Aristide, después Préval, que han ganado los escrutinios con una mayoría muy sólida.<sup>10</sup> El problema es que, aunque la Constitución haitiana teóricamente atribuya poderes equitativos a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en la práctica falla por la ausencia de una arquitectura de rendición de cuentas entre ellos. Esta falta permite en última instancia el fortalecimiento de la figura presidencial que en nada beneficia la fluidez del conjunto de las instituciones.

Con un Consejo Electoral Provisional altamente politizado, con un sistema judicial extremadamente dependiente del ejecutivo en la persona del ministro de Justicia y con un parlamento que padece de una falta de recursos humanos y materiales para servir de estructura de contrapeso al Presidente, es fácil que el propio ejecutivo caiga en la inoperancia. Sin un cuadro institucional estable que dé espacio al gobierno y a la oposición para ejercer su competencia natural en la arena política, la violencia surgió y surge como mecanismo alternativo de contestación o de toma del poder.

Todo este fenómeno se ve ampliado por la falta de cuadros profesionales capaces de desarrollar sus funciones de gobierno u oposición de una forma constructiva. Una vez más la Constitución haitiana pone obstáculos al impedir el ejercicio de cargos públicos a personas de otras nacionalidades, excluyendo una importante fracción de la diáspora formada en universidades de otros países donde adquirió otra nacionalidad. Con este panorama, el débil marco institucional ha permitido la persistencia de un modo de hacer política en función del mantenimiento de intereses particulares, más que en función de un modelo constructivo de gobernabilidad.

## Recuperar la década perdida

La intervención de la ONU desde 1993 ha fallado por la incapacidad de tener esta visión de conjunto, habiendo centrado el foco de su actuación durante una década en la cuestión prioritaria pero insuficiente de la seguridad, relegando a un plan secundario el fortalecimiento real de un marco institucional y político coherente.

Incapaz de sobreponerse a los actores nacionales en este fortalecimiento, el papel de las Naciones Unidas podría y debería haber sido –especialmente en los momentos en que asumió el papel de mediador entre las partes– el de facilitar un diálogo más amplio que no concerniera solamente, como ocurrió, a cuestiones de ámbito más inmediato como, por ejemplo, el simple retorno a un orden constitucional existente, extremadamente débil.

De alguna forma, la ONU intenta ahora con una nueva versión de una Misión Integrada –la MINUSTAH, la séptima misión en el país – subsanar estos errores. Además de la prioridad de la seguridad, la nueva estrategia de actuación pasa por una visión más global y coherente de desarrollo social y político, manifiesta particularmente por la inédita decisión de concentrar en el Representante Especial del Secretario General (SRSG, por sus siglas en inglés) para Haití la coordinación de todo el sistema ONU en el terreno.

---

<sup>10</sup> WORLD BANK (2007) Social Resilience and State Fragility in Haiti, The World Bank, Washington.

No obstante, también la permanencia de la misión es hoy cuestionada. La violencia ha disminuido - uno de los más importantes logros de la MINUSTAH - y con ella la importancia de Haití en las prioridades de la Organización. Paradójicamente, este éxito hace que una Misión con fuerte dimensión y recursos pueda ser reducida a medio plazo.

En realidad, los problemas estructurales de Haití no son nuevos y las Naciones Unidas no podrán, ni de hecho tienen esa función, sustituir a los verdaderos protagonistas. Pero pueden intentar recuperar un debate, que debería haber sido estimulado antes, entre dichos protagonistas. Ese debate, integrador y concreto, debería centrarse sobre qué futuro buscan los haitianos para su país.

Sería importante que la MINUSTAH priorizara en esta etapa:

- La promoción de espacios de debate entre la sociedad civil y las instituciones estatales como forma de fortalecimiento mutuo que permitiera una reflexión conjunta sobre los temas apremiantes y las formas de darles respuesta.<sup>11</sup>
- El impulso a la capacitación de líderes partidarios, favoreciendo la emergencia de nuevos liderazgos, especialmente en el ámbito local y aprovechando el universo de la diáspora.<sup>12</sup>
- La facilitación del proceso legislativo en torno al sistema electoral y al sistema de partidos.
- El fomento del debate sobre una posible reforma de la Constitución.
- El apoyo de un proceso de reconciliación social a través de las estructuras tradicionales existentes de cariz comunitario, dada la ausencia actual de instituciones estatales fiables.

En resumen:

- El fomento de mecanismos de apropiación por el conjunto de la sociedad de un proceso de refundación nacional capaz de definir una estrategia de futuro relativamente consensuada.

---

<sup>11</sup> Con este objetivo se podría, por ejemplo, aprovechar las experiencias de los Consejos inter-departamentales creados en el primer gobierno de Aristide ya referidos o las comisiones paritarias creadas en Guatemala con representantes de diferentes sectores sociales en torno a cada tema de la agenda de la paz.

<sup>12</sup> Del significativo número de haitianos que se estableció sobretodo en Estados Unidos, Canadá y Francia sería importante saber integrar no solamente a aquellos que salieron buscando asilo político en el inicio de los años noventa, sino también a las nuevas generaciones que ganaron experiencia y formación en el extranjero.

Los comentarios de FRIDE ofrecen un análisis breve y conciso de cuestiones internacionales de actualidad en los ámbitos de la democracia, paz y seguridad, derechos humanos, y acción humanitaria y desarrollo. Todas las publicaciones de FRIDE están disponibles en [www.fride.org](http://www.fride.org)

Las ideas expresadas por los autores en los documentos difundidos en la página web no reflejan necesariamente las opiniones de FRIDE. Si tiene algún comentario sobre el artículo o alguna sugerencia, puede ponerse en contacto con nosotros en [comments@fride.org](mailto:comments@fride.org)

**Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior**  
C/ Goya, 5-7 pasaje 2ª - 28001 Madrid - Telf: 91 244 47 40 - Fax: 91 244 47 41 - E-mail : [fride@fride.org](mailto:fride@fride.org)  
[www.fride.org](http://www.fride.org)